

CONTEXTO Y POLÍTICAS EN ESTADOS UNIDOS: 100 DÍAS DE BIDEN

Elizabeth Maier
Cirila Quintero Ramírez
José María Ramos García
Olivia Teresa Ruiz Marrujo



CUADERNOS DE
TRABAJO No. 1

Índice

1. **Estados Unidos en el ojo del huracán**

Olivia Teresa Ruiz Marrujo

Directora, Departamento de Estudios Culturales, El Colef

2. **Estados Unidos: Los tiempos turbulentos de la post verdad**

Elizabeth Maier

Profesora-Investigadora, Departamento de Estudios Culturales, El Colef

3. **Avances y desafíos laborales en los primeros 100 días de la administración de Joseph Biden**

Cirila Quintero Ramírez

Profesora-Investigadora, Departamento de Estudios Sociales, El Colef - Matamoros

4. **Biden 100 días: Una agenda para la competitividad y bienestar**

José María Ramos García

Profesor-Investigador, Departamento de Estudios de Administración Pública, El Colef

CONTEXTO Y POLÍTICAS EN ESTADOS UNIDOS: 100 DÍAS DE BIDEN

Este Reporte deriva del seminario virtual:
"100 Días de la Administración Biden y las Fronteras con México",
El Colef, 20 de abril 2021, www.colef.mx

Introducción

El objetivo de este reporte es destacar los aportes y retos de la administración del presidente Biden a 100 días de su inicio. Para tal efecto, se analizarán el contexto de su ascenso, el debate de los derechos civiles y los grupos de extrema de derecha que generaron violencia en el Capitolio; también se analizará la política laboral en Estados Unidos y finalmente, se examinará la agenda diversa del gobierno de Biden en materia de COVID-19, gestión y política migratoria, política de cambio climático, control de armas, derechos civiles y política antidrogas.

Esta nueva administración en Estados Unidos está marcando una agenda para la competitividad, el fortalecimiento de la salud, con una eficaz política de vacunación y la reactivación económica.

1. Estados Unidos en el ojo del huracán

Olivia Teresa Ruiz Marrujo

Directora, Departamento de Estudios Culturales, El Colef

Joseph Biden llegó a la presidencia en una coyuntura de tensiones que, si bien no son nuevas, han asumido una nueva urgencia ante la pandemia del COVID-19. Me refiero, por ejemplo, al resurgimiento del conflicto racial, reflejo de profundas desigualdades e injusticias que ponen en jaque la gobernanza, la economía y el tejido social mismo de la nación. Para hacer frente a esta situación la nueva administración ha dado una serie de vueltas políticas, si no ideológicas, un poco sorprendidas, dada la trayectoria de Biden (miembro moderado, en momentos conservador, del partido Demócrata), que son de tinte progresista, algunas alineadas con el ala de más izquierda de su partido, sino de la nación. En particular, a sus 100 días, la política económica propuesta para la nación pareciera estar fundada en tres ejes: la redistribución de los recursos dentro del país, la activación del Estado para llevar a cabo esa redistribución y el fomento de un mayor balance entre el interés individual y colectivo.

La historia del COVID-19 en Estados Unidos todavía no se escribe, pero es probable que en cuanto se haga saldrá a relucir el papel que jugó en la apertura a una crítica del proyecto neo-liberal y en el ajuste de cuentas del pasado de desigualdades e injusticias en el país. No es exagerado decir que la pandemia derrotó la apuesta del entonces presidente Donald Trump por un segundo término y abrió paso a un giro en la economía política nacional. Aunque todavía está por verse, se vislumbra la posibilidad de ajustar los cimientos en que ha estado asentado el país desde su inicio, cimientos que se fortalecieron con la presidencia de Ronald Reagan y subsiguientes administraciones. Recordemos que el presidente Reagan se dedicó a desmantelar los últimos los vestigios del *New Deal* del presidente Franklin Roosevelt (1933-1945), basado en la regulación gubernamental de la economía y en el balance de los múltiples intereses y grupos que componían el entorno nacional. En su lugar, el presidente Reagan y gobiernos posteriores impusieron y consolidaron el modelo neo-liberal y la ideología *laissez-faire*.

Como "gota que derramó el vaso" la pandemia fue revelando la manera en que el neo-liberalismo había instaurado las condiciones que aceleraron la propagación del virus e impidieron una eficaz respuesta al mismo, convirtiendo a EEUU, durante una temporada, en el epicentro mundial de la pandemia, con altísimas tasas de contagio, enfermedad y muerte. El virus llegó a un país con un sector de Salud Pública abandonado, lo que dificultó su capacidad para responder a las exigencias de la pandemia. El sistema de salud, en manos de grandes compañías privadas, respondió al COVID-19 con la lógica del mercado, por ende, no obstante las necesidades tan apremiantes de la nación, continuó ofreciendo medicamentos y demás bienes de salud al mejor postor - al que podía pagar más. Así, en sus intentos por responder a los ascensos dramáticos e inesperados de contagios y muertes, los gobernadores de los distintos estados de la federación no tenían otra opción que entrar en competencia, unos con los otros, por los materiales que necesitaban sus ciudadanos para sobrevivir la enfermedad.

Como consecuencia, el virus arrasó con los sectores más vulnerables de la sociedad estadounidense, entre ellos las comunidades de color (negras, latinas e indígenas, por ejemplo) y los sectores con mayores índices de pobreza. De esta forma, la pandemia destapó la enorme inequidad que el modelo había fomentado a lo largo y ancho del país. Existían grupos y comunidades que habían acumulado una serie de vulnerabilidades – empleos con bajos salarios y sin beneficios, poco o nulo acceso a servicios de salud confiables, raquíticos estados de salud en general - que llevaron a grandes inequidades en las tasas de

infección. El asesinato de George Floyd en mayo de 2020, las muertes de otras personas negras a manos de las fuerzas policíacas, y las protestas subsiguientes en contra de la violencia racial solo vinieron a recalcar la profundidad de esa desigualdad e injusticia.

Ante tal escenario y con el fin de enfrentar los desequilibrios tan profundos en el país, el presidente Biden y su equipo propusieron una serie de políticas. Todas planteaban una distribución más igualitaria de recursos a nivel nacional, lo cual requería un Estado activo y propulsor para lograrla. Ideológicamente, implicaba un mejor balance entre el interés individual y el bienestar colectivo.

Las señales de ese giro se hicieron ver de inmediato. A través del orden ejecutivo 13995 (21 de enero 2021) se estableció el *Health Equity Task Force* para asegurar una respuesta equitativa a la pandemia. Teniendo en mente el desproporcional padecimiento del virus entre poblaciones de color y de menos recursos, las medidas incluidas exigían: expandir los programas de vacunación entre poblaciones en mayor riesgo de enfermedad y muerte; proveer mayor información (sobre medidas preventivas, por ejemplo); y hacer más costeable y accesible el servicio de salud. Reconociendo las raíces estructurales de la inequidad en el país, el plan de infraestructura de la administración Biden ha propuesto invertir en comunidades de color de bajos ingresos, reconectar esas comunidades y barrios a centros de oportunidad económica y llevar a cabo programas de limpieza de desechos tóxicos, concentrados de manera abrumadora en comunidades económicamente marginales. Otros aspectos consisten en: expandir el servicio de internet a comunidades rurales marginadas, apoyar el cuidado en casa de personas de tercera edad y deshabilitadas e invertir en universidades que atienden mayoritariamente a estudiantes de minorías étnico-raciales. De manera semejante, el *American Families Plan* ha propuesto subsidiar la educación pre-escolar, establecer la ausencia pagada del trabajo y en general ofrecer mayores apoyos a familias de bajos ingresos.

Enfrentar el conflicto racial, doliente rezago nacional, ha sido prioritario para la nueva administración. Así, junto con las medidas mencionadas arriba, en enero el recién nombrado Procurador General de la Nación, Merrick Garland, propuso darle prioridad a la justicia racial y el combate de los movimientos extremistas de supremacía blanca. También subrayó la necesidad de enfrentar el racismo institucional en los sistemas de educación, vivienda, finanzas y en las fuerzas de seguridad del país.

Lo que propone la nueva administración es retador. Toca los cimientos de lo que se podría nombrar el fundamento ontológico de Estados Unidos, esto es, la tensión entre el individuo y la colectividad que remarcó de Tocqueville de manera acuciosa en su texto clásico *La Democracia en América* (1835). Citando a de Tocqueville, se trata del balance entre el ciudadano que "no le debe nada a nadie ...piensa en sí mismo en aislamiento... confinado en la soledad de su propio corazón" y aquel que vive arraigado en las instituciones de su comunidad donde reproduce y fomenta las virtudes cívicas que consolidan su compromiso con esa comunidad. Quizás en pocos momentos de la historia, Estados Unidos (como otros estados-naciones del planeta), ha enfrentado el reto de crear un mejor balance entre el individualismo, herencia de la Ilustración y el capitalismo global, y el bienestar colectivo, esto es, los entornos de la vida social en que están todos inmersos y anclados. Todavía no es claro cuál será el desenlace de esta tensión. Lo que sí parece cierto es la necesidad de encaminar el país a un rumbo distinto - para salir de la pandemia y crear un país con menor desigualdad y mayor justicia, todo esto con el fin de evitar reproducir las condiciones que crearon la posibilidad de la tragedia que se presencia y vive en Estados Unidos y el mundo hoy en día.

2. Estados Unidos: Los tiempos turbulentos de la post verdad

Elizabeth Maier

Profesora-Investigadora, Departamento de Estudios Culturales, El Colef

Introducción

Como antecedente a los 100 días de la administración Biden -pero aún muy presente en la conciencia nacional- está la toma violenta del Capitolio, el 6 de enero de 2021. Dicho evento no solo ilustró la profunda división política del país, sino que también iluminó la existencia y legitimación política en círculos conservadores de grupos armados de ultraderecha, anteriormente considerados extremistas radicales del margen. Asimismo, el motín del Capitolio develó la creciente influencia de fuentes de información -cibernéticas, de radio y televisión- que -como la definió anteriormente una alta funcionaria de la administración de Donald Trump- descansan en "hechos alternativos", en "realidades alternativas", generalmente falsas y de esencia conspiratoria. En este texto propongo de manera inicial identificar algunos factores que contribuyen al crecimiento de dichos grupos de ultraderecha, -paramilitares, en su mayoría-, destacando aspectos de su ideología y sus metas.

El Contexto

El contexto actual de los Estados Unidos se caracteriza por diversas crisis, nunca antes experimentadas de manera conjunta y de mutua potencialización. Confluyen las crisis de: hegemonía mundial, con su correspondiente pérdida de influencia y poder global; de salud y los desastrosos resultados del mal manejo de la pandemia posmoderna por la administración de Trump; la crisis del modelo económico neoliberal, ilustrado por una creciente polarización socioeconómica, con la ampliación y profundización de la pobreza para un sector significativo por un lado, y la reproducción -casi vulgar- de la riqueza de un sector muy reducido de la población, por el otro; la crisis económica nacional que representa los impactos inmediatos del COVID-, con 16.9 millones de personas cobrando el seguro de desempleo y un 6% de desempleo total (Huffington post, 26 abril 2021); la crisis de la violencia armada -con asesinatos masivos y heridos individuales- sustentada por el derecho legal a poseer armas y ensanchada por la crisis de salud mental; los efectos locales de la crisis ambiental global; y -en especial para el presente análisis- la profunda crisis del racismo y los resabios de una historia colonial-esclavista de aniquilación indígena y de expropiación corporal y deshumanización afroamericanas; y finalmente pero no menos significativo, las tensiones creadas por la reconfiguración demográfica-cultural, que en pocos lustros definirá como minoritaria a la población blanca. Tan profundas son las implicaciones de esta mancuerna crítica, que hay teóricos que formulan la hipótesis de una crisis civilizatoria (Grosfoguel, 1916), mientras que otros hablan de "un momento de resquebraje que apunta a la posibilidad de una transformación profunda de raíz" (Eddie Glaude, director de los Estudios Afroamericanos de Princeton University, en entrevista televisivo 07-04-2021).

Dicho contexto de múltiples crisis articuladas, potencializa sentimientos de vulnerabilidad, resentimiento, pérdida y miedo entre sectores sociales anteriormente dominantes. Asimismo, informa la constitución de sujetos colectivos en defensa de visiones societales a que conserven viejos órdenes jerárquicos, oportunidades y privilegios. Raza, etnicidad, género y religión y la construcción de otredades informan dicha sociología política.

Los hechos del Capitolio

El ataque al Capitolio visibilizó para todo el mundo una furiosa, sublevada y violenta masa de gente blanca, en su mayoría masculina, de pertinencia o simpatía orgánica diversa. Robustecidos con palos, objetos pesados, pistolas de electrochoque y químicos diversos, llegaron dispuestos/as a la obstrucción -o destrucción- institucional del Estado y la democracia liberal, instigados/as por la gran mentira del triunfo electoral de Donald Trump. Decenas de miles de personas se congregaron en las afueras del edificio, con la pretensión de "detener el robo" electoral y cumplir las instrucciones presidenciales de "pelear más duro". Se calculan que entre ochocientas y mil personas finalmente irrumpieron al Capitolio para impedir la transferencia institucional y pacífica del poder. Invadieron los pasillos, tomaron la Cámara de Diputados/as y el Senado y saquearon las oficinas de representantes y senadores/as. De repente oraron, invocando a la protección divina y referenciando profecías cristianas fundamentalistas compartidas por la mayoría de los/as presentes.

Hasta hoy (29 abril 2021), cuatrocientas diez personas han sido penalmente consignadas, y según la confirmación del Departamento de Justicia (Procuraduría General de la Republica), se formalizarán cargos contra cien personas más, sumando un total de quinientos diez imputados/as. Los acusan de crímenes que incluyen la entrada ilegal, destrucción de propiedad gubernamental, obstrucción gubernamental, resistencia y obstaculización policial, uso de armas mortales o peligrosas y -en treinta casos- los acusan de conspiración, que implica coordinación anticipada. Vale señalar que el 10% son mujeres, mientras que el 10% del total de acusados/as son militares activos o jubilados/as y el 5% son expolicías, lo que implica que cuentan con entrenamiento especializado antes su actual participación (<https://www.cbsnews.com/news/capitol-riot-arrests-2021-04-29/>).

Antecedentes del paramilitarismo nativista estadounidense

El movimiento nativista no es nuevo en Estados Unidos, sino que se reaparece y crece en los momentos nacionales de transformación e incertidumbre, sobre todo, los vinculados a la inmigración y la reconfiguración racial, étnica y religiosa. Según Belew (2018), el trauma de la guerra de Vietnam y desencantamiento con los fracasos nacionales de las consiguientes intervenciones estadounidenses después del 9/11 -aunado a los cambios demográficos y los avances feministas durante las últimas cinco décadas- han vigorizado el actual movimiento de poder blanco. La narrativa de la preservación hegemónica de la cultura cristiana europea (nativismo) ha permeado a todas las organizaciones de ultraderecha (Alt-Right), tanto a los que el *Southern Poverty Law Center* (<https://www.splcenter.org>) llama grupos de odio, como los que define como organizaciones antigubernamentales. El miedo del reemplazo racial, cultural y religioso (la teoría del reemplazo) ha nutrido la consolidación de ideologías de odio y exclusión y la conformación de grupos paramilitares, generalmente de hombres, con un porcentaje significativo de entrenamiento militar y/o policiaca anterior o actual.

Respaldando las posiciones antigubernamentales de las múltiples milicias locales paramilitares masculinas -presentes en la mayoría de los estados de la República- existen agrupamientos nacionales antigubernamentales, no exclusivamente de varones, como los *Oath Keepers* (Defensores del Juramento). Constituido en 2009, como respuesta a la elección de Barack Obama, (junto a su contrapartida, el *Tea Party*), la organización fue formada inicialmente por exmilitares y policías,

actualmente tiene grupos locales en todo el país. Su enfoque de reclutamiento en las fuerzas armadas, en los policías activos y jubilados y en otras instancias de orden público, levanta serias preocupaciones sobre su influencia en dichas instituciones. (Recientemente, un estudio oficial atribuía una afinidad a la ideología de supremacía blanca a cerca de 30% de las Fuerzas Especiales de Ejército -Green Berets-). Asimismo, la actual crisis policiaca derivada de los asesinatos/as habituales de jóvenes afroamericanos/as, no solo remite al racismo estructural institucional sino también a la presencia de individuos con ideología supremacista en las policías locales.

Adscritos a una interpretación originalista de la Constitución, los *Oath Keepers* defienden el acatamiento relativo a las mismas leyes que afirman defender. Es decir, su entendimiento de la Constitución y reconocimiento de la validez jurídica nacional y estatal se relativiza según sus creencias ideológica-políticas. Durante la administración de Donald Trump la agrupación se fungió como una especie de guardia paramilitar para algunos de los allegados más famosos del trumpismo. Pero después de la victoria presidencial de Joseph Biden, iniciaron entrenamientos más intensos de guerra urbana y control de motines, considerando que el país se encontraba en una segunda guerra civil. Para la insurrección del Capitolio, planearon introducir armas a Washington, D.C., en espera -según una de las arrestadas- de las "instrucciones del señor Trump, de cómo enfrentar los resultados electorales" (<https://www.nytimes.com/2021/02/19/us/politics/oath-keepers-capitol-riot-plot.html>). Empero desde la toma del Capitolio se registran tensiones y algunas fracturas al interior de *Oath Keepers*, dado que varias de sus secciones estatales están en desacuerdo con dicha participación.

Los *Proud Boys* (Muchachos Orgullosos; 2016) son de formación más reciente, fortaleciéndose a la sombra misógina del régimen de Trump y fungiendo como una especie de brazo armado paramilitar. Conocidos por sus prácticas violentas contra organizaciones progresistas, su antisemitismo, anti LGBTI, antifeminismo y misoginia, los *Proud Boys* encarnan una ola nacional de resistencia a los cambios del régimen de género de las últimas décadas y un intento por conservar los históricos privilegios masculinos. Enaltecen una representación de la masculinidad heterosexual de violencia, confrontación, intimidación y dominación. Clasificado como un "grupo terrorista" por Canadá, recientemente sus integrantes han recaudado grandes sumas de dinero en la ciber-plataforma cristiana *GiveSendGo*, cuando otras plataformas les han cerrado el paso (The Guardian; 10-04-2021). Considerados los secuaces más provocadores y agresivos del expresidente, dicha organización de ultraderecha se reconoce como "chauvinista occidental", lo que entrañaría su acoplamiento con la supremacía blanca.

Por su parte, Q'Anon -la conspirativa red social ciber-política- viste rasgos distintos, cortando y pegando facetas de diversos discursos para zurcir visiones alternas de la realidad social. Idealizando a Trump como la corporeización del Salvador, creen que el Q (el ciber-operador anónimo, callado desde diciembre de 2020), posiblemente fuese el propio expresidente o alguien muy cercano a él. El Q'Anón(imo) arrancó sus intervenciones en línea con la teoría conspirativa del Estado profundo poblado por Demócratas dedicados/as a traficar niños y niñas. En particular, Hillary Clinton y sus allegados/as fueron señaladas/os como las/os representantes del Mal, torturando y asesinandolos para beber su sangre y así rejuvenecerse con un ingrediente que supuestamente emiten los cuerpos de menores martirizados. Las referencias antisemitas de sus teorías conspirativas son históricas. Algunas remiten a la creencia romana de la era cristiana de que los judíos bebían la sangre de bebés cristianos para fortalecerse. Asimismo, su consigna la tormenta, que se refiere a eventos -como la invasión del Capitolio- que supuestamente terminarán a su favor y resolverá a todos los problemas, literalmente restituye la misma consigna nazi, ejemplificado por

las tropas de tormenta de Hitler. Adicionalmente, una nueva teoría conspirativa suya evoca a los rayos extraterrestres judíos que supuestamente causaron los incendios en California, con el objetivo de acaparar la tierra y así avanzar su control sobre la economía. El Q'Anon ha sido declarado un grupo sumamente peligroso por la organización judía de derechos humanos, the Anti-Defamation League (La Liga Contra la Difamación). Con el fracaso de sus predicciones de que Trump seguirá como presidente, muchas/os de sus allegadas/os se han desilusionado, haciéndose blancos de las campañas de reclutamiento de las otras fuerzas armadas antigubernamentales y de odio.

Sin embargo, en cuanto a la membresía de estos grupos, habría que tomar en cuenta lo que teóricos han llamado las paradojas interseccionales, es decir, las contradicciones identitarias que florecen infrecuentemente a raíz de la articulación de distintas dimensiones de identidad. Esto es el caso de la comandanta de la milicia de Ohio y notoria participante de los *Oath Keepers* en la toma del Capitolio - actualmente indiciada por conspiración, obstrucción de un procedimiento oficial, destrucción de propiedad gubernamental y entrada ilegal- que resulta ser una mujer transgénero, injustamente expulsada de las fuerzas armadas por lo mismo. Por su lado, el fundador y coordinador de los *Proud Boys* es de origen afrocubano, contradiciendo con su propio cuerpo la premisa de supremacía blanca asociada al grupo.

En resumen, en medio del contexto contemporáneo estadounidense de múltiples, yuxtapuestas y mutuamente potencializadas crisis, la voluntad de culpar a otros y el deseo de mantener el orden social tradicional de privilegios y poder se zurcen como una narrativa de continuidad, seguridad y permanencia de un sector de la población que se ha sentido desplazado. Sumándose a muchos otros grupos de odio y antigubernamentales, los grupos mencionados constituyen el brazo paramilitar y conspirativo del trumpismo, con influencia innegable en ciertas localidades y estados. Según Roberto Pape, de la Universidad de Chicago, el 4% de la población adulta no solo cree que la elección fue robada, sino que están dispuestos a ser violentos para imponer sus narrativas ideológicas originalistas y supremacistas. Su posicionamiento autoritario-ultraderechista y las creencias conspirativas y mesiánicas (en casos), potencializadas por las nuevas tecnologías, informan a una nueva tendencia política que en la actualidad parece haber abandonado la apuesta por la democracia liberal. Así que la amenaza antidemocrática simbolizada por la toma del Capitolio no fue un evento de un día, sino que sigue vigente. Actualmente, se ejemplifica en los intentos jurídicos por parte del Partido Republicano de restringir el acceso al voto en casi todos los estados, además de continuar cuestionando la validez de la elección presidencial. Por lo mismo, la disputa política en los Estados Unidos en los años venideros no será de matices, sino de la propia esencia del modelo político.

3. Avances y desafíos laborales en los primeros 100 días de la administración de Joseph Biden

Cirila Quintero Ramírez

Profesora-Investigadora, El Colef, Departamento de Estudios Sociales -Matamoros

El pasado 27 de abril, Joseph Biden cumplió 100 días como Presidente de Estados Unidos, la mayor parte de analistas coinciden en que estos días han sido de cambios vertiginosos e importantes, particularmente en temas centrales, y que tienen urgencia de ser resueltos, como sería la vacunación masiva de la población contra el COVID 19, la implementación de programas económicos para reactivar la economía como el Buy American, y el tema migratorio, mediante la reactivación del programa de asilo, especialmente para ciudadanos centroamericanos.

Un tema poco mencionado en el discurso de 100 días de Biden fue el referente a la política laboral, salvo la mención de incremento salarial a trabajadores federales. Aún sin haber sido mencionados con profusión, los trabajadores han sido pieza fundamental en la elección de Biden y en lo que va de su administración. El apoyo abierto a los trabajadores constituye un cambio de viraje en comparación con la política del ex presidente Donald Trump, quien se había caracterizado por un apoyo mayor al sector empresarial. La política prolaboral fue uno de los puntos centrales de su campaña presidencial, existe todo un proyecto laboral, que de llevarse a cabo empoderaría al sector trabajador. No obstante, lo visualizado en estos primeros cien días muestra que el cambio de viraje no será fácil, si bien ha habido avances otros aspectos, como la sindicalización de los trabajadores, no han avanzado como se esperaba, dado el cuestionamiento estructural que estos representan para la cultura laboral de Estados Unidos. Este artículo presenta algunas de los avances, pendientes y retos que se han observado en materia laboral durante los primeros 100 días de Biden.

La promesas laborales de Biden

Previo a la exposición habrá que recordar los aspectos fundamentales que integran el Programa Laboral del presidente Biden: primero, el fortalecimiento de los sindicatos y de la contratación colectiva, mediante el apoyo gubernamental a la sindicalización de todos los trabajadores, incluyendo los del gobierno federal y del sector agrícola, lo que significaría una confrontación abierta con un porcentaje alto del empresariado norteamericano que se ha opuesto a la sindicalización de los obreros; segundo, asegurar que todos los trabajadores sean tratados de manera digna, en el espacio de trabajo y en sus condiciones laborales, y tengan un salario digno. Biden ha mencionado su meta de elevar el salario mínimo a 15 dólares la hora. Nuevamente, alcanzar este pago en algunos sectores altamente precarizados como el agrícola parece difícil. A pesar de ello, este período permite observar un avance pero también incertidumbre.

Los avances laborales: nombramiento de autoridades, creación de empleos y cuidado de la salud.

Un aspecto relevante para implementar cambios en materia laboral, lo constituye el nombrar funcionarios empáticos con este pensamiento. El nombramiento del laborista Marty Walsh, en febrero de 2021, como Secretario de Trabajo constituyó una decisión central, en los primeros días de gobierno. Walsh tiene amplia experiencia en materia laboral, y buena opinión entre los sindicalistas, además de que se le

reconoce como una persona conciliadora. Entre los retos principales que enfrentará Walsh se encontraba el tema de las vacunas a los trabajadores esenciales, el incremento salarial, los ajustes del salario de desempleo y las pensiones, (Mueller, 2021) Quizá el reto más fuerte de Walsh será la conciliación entre empresarios y trabajadores.

Complementaria con esta medida, el presidente Biden, en enero, había removido al Consejero General de la Junta Nacional de Relaciones Laborales, Peter Robb, quien se había convertido en una pieza fundamental para frenar huelgas y obstaculizar la sindicalización, de acuerdo a algunos analistas Robb se convirtió más en un perseguidor que un apoyo para los trabajadores. La remoción fue una decisión aplaudida por los trabajadores, dado que abre las puertas a que la luchas de varios trabajadores que buscan sindicalizarse, prospere. La Junta es una agencia laboral independiente y busca proteger a los trabajadores tanto de las prácticas laborales injustas por parte de los empleadores como de los sindicatos. La Junta también tiene como función garantizar que los trabajadores puedan negociar colectivamente, y decidir sobre casos de prácticas laborales injustas después de que los jueces administrativos han escuchado previamente a los trabajadores. Así pues, contar con un Consejero afín a los trabajadores resulta fundamental.

El otro aspecto relevante, en donde se han dado las primeras medidas importante, es la potencialidad para crear nuevos empleos a través de revitalizar algunos sectores industriales. Biden pretende esta reactivación industrial mediante el programa Buy American, que busca reactivar sectores como la manufactura automotriz, y otras industrias para que los norteamericanos compren en Estados Unidos, también se trataría de estimular que la industria se convierta en proveedor de muchos de los productos y servicios que utiliza el gobierno federal.

Este proyecto no sólo buscar impulsar empleos en las industrias tradicionales, como la automotriz, sino a sectores de industrias avanzadas, vinculadas al conocimiento, como la producción de vehículos eléctricos, así como en áreas industriales vinculadas a las energías renovables. También busca impulsar el consumo de productos hechos en Estados Unidos, y mejorar su posición dentro de la competencia internacional; el aumento de salarios, crear más trabajos sindicalizados, apoyar a los pequeños empresarios y fortalecer a Estados Unidos en la cadena de valor internacional. En materia de empleos, el presidente Biden ha expresado "para asegurar que el futuro sea hecho en América, nosotros necesitamos no sólo ganar los empleos de ahora sino los trabajos de las industrias de mañana", (Shalal/Alper/Aeppel, 2021). La protección de industrias norteamericanas podría representar algunos problemas con la Organización Mundial del Comercio (OMC), sin embargo, Biden ha manifestado su respeto a los acuerdos comerciales y su disposición a negociar cualquier controversia.

Los avances a medio camino y los desencuentros

Existen algunas consideraciones que ya han sido agendadas pero que no han sido debidamente implementadas o aprobadas, particularmente habría que mencionar el caso de la vacunación y el incremento salarial.

El proyecto laboral también contempla el cuidado de la salud de los trabajadores y el mejoramiento de los espacios laborales para lograrlo Biden ha mencionado el otorgar incentivos a los empresarios que mejoren

sus espacios laborales y liberen el tiempo necesario para que sus trabajadores se vacunen. A pesar de estos incentivos, aún no ha existido una respuesta destacada por parte de los empleadores. De la misma manera, no se ha podido vacunar a todos los trabajadores esenciales.

Las peticiones de algunos sindicatos en torno a la vacunación de trabajadores esenciales han incluido no solo a los trabajadores de la salud sino a los trabajadores agropecuarios dado su alta exposición durante su jornada laboral. Algunos de los principales empleados de esta rama han apoyado a la vacunación de sus trabajadores debido a la presión de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), que promueven los derechos laborales. Sin embargo, un porcentaje importante de trabajadores aún falta por ser vacunado.

El segundo aspecto que se ha propuesto pero no ha sido aceptado para la totalidad de los trabajadores, se refiere al incremento salarial, el Congreso no aprobó la iniciativa por considerar que excedía el presupuesto gubernamental, pero la propuesta se mantiene. El incremento salarial es uno de los aspectos más difíciles a ser alcanzados, especialmente en sectores tan precarizados como los restaurantes o los servicios, en donde el salario es de 7.25 dólares. Aunque algunos grandes corporativos de la distribución como Costco, Target o Amazon, ya fijaron su salario 15 dólares o más, (Diario de Querétaro, 27 abril 2021).

A pesar de aún no ser aprobada la propuesta, Biden ha dado un paso importante en esta materia, para el caso de los trabajadores del gobierno federal, y decretó el incremento salarial de 15 dólares la hora, para los trabajadores subcontratados en este sector, que comprenden desde trabajadores de mantenimiento o conservación de edificios federales, hasta camareros en cafeterías gubernamentales o asistentes de veteranos. Estos trabajadores ganan actualmente 10.95 dólares la hora. La decisión fue tomada justo al cumplir 100 días al frente del gobierno. El convenio marca que todas las empresas que presten servicios al gobierno deberán pagar a sus trabajadores 15 dólares la hora. Sin embargo, la implementación no será inmediata, sino que entrará en vigencia hasta marzo de 2022, (Diario de Querétaro, 27 abril 2021). El interés en el mejoramiento de las condiciones de los trabajadores se trataría de una forma de resarcirles los atropellos que cometió con ellos Donald Trump, quien les retiró varios beneficios y les impidió el derecho a la sindicalizarse.

En este apartado habría que mencionar que aparte de estas acciones a medio camino, la relación entre el presidente Biden y trabajadores, se ha tensado en algunos momentos, lo que ha desembocado en desencuentros, especialmente habría que mencionar la oposición que distintos sindicatos realizaron ante el cierre del Oleoducto canadiense Keystone XL, con la finalidad de proteger ambiente y comunidades, como parte del proyecto ambiental que promueve Biden. La protesta se derivó porque, de acuerdo a los sindicalistas, se perdieron 600 empleos, además de miles que se pensaban crear. A pesar de la protesta, la cancelación fue realizada. La otra confrontación se escenificó entre los sindicatos de profesores y Biden sobre el regreso a clases. El presidente se había comprometido en sus primeros 100 días a regresar a clases, sin embargo, el sindicato de profesores, se ha opuesto al regreso, hasta que todo el personal docente esté vacunado, Biden, a pesar de las presiones de otros sectores, ha cedido a tal petición.

Si bien las diferencias son algo normales en las relaciones políticas, habría que mencionar que estas confrontaciones anuncian que aspectos centrales, como el proyecto ambientan y las industrias de energía limpia, no siempre serán compatibles con los intereses laborales, dado el empleo que existe en industrias tradicionales, como lo oleoductos, de cientos de trabajadores. La negociación resultará clave con el fin de evitar confrontaciones que podrían desgastar la relación.

Los principales retos: la oposición al derecho a la sindicalización y la regulación laboral

No todo han sido buenas noticias en la parte laboral, también los primeros cien días de Biden han evidenciado algunos de los principales retos laborales para el presidente, el primero, y quizá más importante sería: la oposición empresarial a la sindicalización. Otro reto similar reside en la regularización de miles de trabajadores migratorios que están en todas las áreas, que se enlaza también con la regulación de otros sectores que se han desarrollado con rapidez pero cuyas condiciones laborales no han evolucionado de la misma manera, como serían las condiciones laborales de los trabajadores de plataformas electrónicas. La dificultad de superar estos retos reside en que cuestionan aspectos estructurales de las relaciones laborales de Estados Unidos. El derecho a la sindicalización pone en tela de juicio el decreto de "Right to the work", en donde el empleador encuentra grandes ventajas al contratar a trabajadores de manera individual, sin necesidad de estar sindicalizados; el segundo, pondría a prueba a los empleadores de trabajadores migratorios, un porcentaje importante en situación irregular, que encuentran importantes ventajas competitivas al pagar costos salariales menores, así como brindar condiciones laborales precarias, como demuestra un reporte reciente sobre trabajadores migratorios agrícolas (Bacon, 2021).

En el cumplimiento de la defensa sindical, habría que decir, que, a pesar del impulso al derecho a la sindicalización y la contratación colectiva, aún no se ha convertido en una propuesta de ley. Se ha mencionado pero de manera informal, de manera que las primeras luchas por la sindicalización, no han estado aún cobijadas por nuevas leyes, aunque si por el apoyo presidencial, como se observó en el movimiento de sindicalización de los trabajadores de Amazon en Alabama, en donde el presidente Biden expreso que: "no correspondía a él o las empresas decidir sobre la sindicalización o no de sus trabajadores". La declaración se derivó de la obstaculización de la empresa para que sus trabajadores se sindicalizaran, a través de la asistencia obligatoria a reuniones para desanimarlos a sindicalizarse y de campaña en medios de comunicación. Biden complementó su mensaje con la siguiente declaración:

"No debe haber intimidación, coacción, amenazas o propaganda antisindical. Ningún supervisor debería confrontar a los empleados sobre sus preferencias sindicales. Cada trabajador debe tener la posibilidad de afiliarse libremente a un sindicato. La ley garantiza esa elección", (Ventura, 2021).

A pesar del apoyo gubernamental recibido, la votación para formar un sindicato en Amazon, no prosperó, en abril de 2021, con un porcentaje amplio de abstención, se votó para que no se formará el sindicato. Sin duda, esto podría considerarse la principal derrota laboral de la administración Biden.

Más aún no solo da cuenta de la derrota sino enuncia la principal lucha que tendrá que librar Biden para garantizar el derecho a la sindicalización y la contratación colectiva: la oposición empresarial. El empresariado estadounidense, aparte de contar en distintos estados con la Ley Right to the work, que inhibe la sindicalización de los trabajadores, también "cuentan con muchos abogados para impedir la sindicalización de los trabajadores" (Ben Davis, miembro de Steelworkers, 29 de abril de 2021), o bien para dirimir conflictos.

El incremento salarial de grandes transportistas o servicios, como COTSCO, o bien tiendas departamentales como MACY'S muestra que el empresariado norteamericano está más dispuesto acatar esta disposición que a permitir la sindicalización, dado que eso implicaría la generación de derechos colectivos que llevarían al mejoramiento laboral como grupo además de antigüedad laboral, condiciones con las que no están de acuerdo. Aunque también los analistas señalan que la sindicalización podría conducir a un impacto negativo en sus acciones, (Ezanime.Net. 12 de abril).

El otro reto central, lo constituye la exigencia en el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores migratorios. La presión ha venido tanto por parte de defensores laborales como David Bacon, quien mediante un reporte mostró las condiciones laborales "cercanas a la esclavitud" en la que se laboraban los trabajadores huéspedes con visa H-2A en los campos agrícolas. El reporte ocasionó que distintos activistas exigieran al presidente Biden el cese de estas condiciones.

El 14 de abril, el tema fue retomado por distintos Congresistas de California, Texas y Massachusetts quienes enviaron una solicitud a Biden para presentar una iniciativa de Ley de Ciudadanía para Trabajadores Esenciales, en el próximo paquete de infraestructura. De acuerdo a los congresistas, una ley de este tipo constituiría un camino justo, seguro y accesible para más de 5 millones de trabajadores inmigrantes esenciales en el cuidado de la salud, agricultura, construcción, alimentos, energía, respuesta a emergencias, atención y otros sectores de infraestructura que han sido fundamentales durante la pandemia, de acuerdo a los congresistas, sin estos trabajadores hubiese colapsado el sistema de servicios de Estados Unidos, (Adelante Valle, 21 de abril de 2021).

Un comentario final, si bien la regulación laboral ha sido exaltada para los trabajadores migratorios, existen otros sectores, como los vinculados con el trabajo de plataformas, o la denominada economía Gig, como sería el caso de Uber, en donde el presidente Biden ha manifestado la necesidad de regularizar las condiciones laborales de sus empleados que son considerados como trabajadores autónomos, cuando en realidad son empleados y por lo tanto sujetos de derechos, (Expansión, 29 de abril). Esta regulación laboral, dado los miles de trabajadores involucrados, y las fuertes inversiones en el sector, también será otro de los retos a los que se enfrentará Biden en su propósito de mejorar las condiciones laborales.

A manera de conclusión

Las argumentaciones presentadas en este texto muestran que para cumplir el programa laboral presidencial no será suficiente el nombramiento de funcionarios prolaborales y la alianza con sindicatos. Por el contrario se necesitan estrategias de negociación con el sector empresarial que permitan avanzar en los objetivos previstos. La negociación se anuncia complicada dado que el programa laboral está cuestionando las estructuras laborales del sistema estadounidense especialmente en cuanto al derecho de sindicalización y la defensa de los derechos colectivos de los trabajadores, y la regulación de un sistema, que se ha caracterizado por la precarización de sus trabajadores por su calidad migratoria o raza. El reto no solo es negociar sino encontrar un balance entre intereses empresariales y laborales que impida la confrontación abierta, que podría conducir al estancamiento y, en el peor de los casos, al abandono de un proyecto que busca reintegrar al sector laboral a una agenda gubernamental que los ha excluido por décadas, el objetivo resulta loable, la realidad existente y sobre todo los intereses económicos que persisten auguran un camino difícil para conseguirlo.

Referencias

Bacon, David, 2021, Dignity or Exploitation. What future for Farmworker families in the United States?. The Oakland Institute, California.

Biden, Joe, 2020, "The Biden Plan for Strengthening Worker Organizing", Collective Bargaining, an Unions en <https://joebiden.com/empowerworkers/>, consultado 15 de noviembre de 2020

"Biden aumenta salario mínimo de subcontratados del Gobierno," Diario de Querétaro, 27 abril, en <https://www.diariodequeretaro.com.mx/mundo/biden-aumenta-salario-minimo-de-subcontratados-del-gobierno-6647322.html>, consultado 1 de mayo de 2021.

"Instan a Biden a aprobar ciudadanía a trabajadores esenciales" en Adelante Valle, 14 abril, en https://www.ivpressonline.com/adelantevalle/instan-a-biden-a-aprobar-ciudadan-a-para-trabajadores-esenciales/article_ea42e012-9cab-11eb-9358-fb6c27fde5cf.html, consultado 1 de mayo de 2021.

Mueller, Eleonor, 2021, "Card-carrying union member Walsh, Biden's Labor nominee, wins businesses' respect" en Político, <https://www.politico.com/news/2021/02/03/card-carrying-union-member-walsh-bidens-labor-nominee-wins-businesses-respect-465730>, consultado 11 de abril de 2021

Shalal, Andrea, Alexandra Alper, Timothy Aepfel. 2021, "Biden signs 'Buy American' order, pledges to renew U.S. manufacturing" en Reuters.com, <https://www.reuters.com/article/us-usa-biden-idUSKBN29U0Z3>, consultado 10 de abril de 2021

"7 acciones que podrían sufrir los grandes planes sindicales de Biden" en Ezanime.Net, 12 de abril en Ezanime.net. 12 de abril 2021. <https://www.ezanime.net/7-acciones-que-podrian-sufrir-los-grandes-planes-sindicales-de-biden/> consultado el 15 de abril de 2021

Ventura, Víctor, 2021. "Biden se pone del lado de los trabajadores de Amazon en su batalla por fundar un sindicato dentro del gigante comercial" en El Economista, 1 de marzo, en El Economista, 1 de marzo de 2021. <https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/11078397/03/21/Biden-se-pone-del-lado-de-los-trabajadores-de-Amazon-en-su-batalla-por-fundar-un-sindicato-dentro-del-gigante-comercial.html>, consultado 11 de abril de 2021.

Otros Materiales

Videoconferencia: Ben Davis, "Conferencia sobre los trabajadores en el TMEC"

Videoconferencia virtual: "Obligaciones laborales del T-MEC", 27 de abril de 2021

4. Biden 100 días: Una agenda para la competitividad y bienestar

José María Ramos García

Profesor-Investigador, Departamento de Estudios de Administración Pública, El Colef

El nuevo gobierno ha propuesto una agenda distinta con respecto a la pasada administración de Trump. Esta agenda ha repercutido en su relación binacional e internacional. Con lo cual está marcando un sesgo diferente. Algunas diferencias son las siguientes:

COVID-19

El presidente Biden ha superado su propósito original: se proponía vacunar a 100 millones de estadounidenses en sus primeros 100 días. Estados Unidos al 9 de mayo tiene 116 millones de personas completamente vacunadas (35.2 %). La pasada administración no tuvo una estrategia nacional eficaz contra la pandemia.

Un desafío es integrar esta estrategia de salud con la reactivación comercial, en donde la frontera con México debería ser una prioridad. La gestión de los cruces transfronterizos no refleja cambios sustanciales con respecto a la pasada administración. Se mantiene cerrada por 13 meses (marzo 2020 a junio 2021) a los mexicanos con visa estadounidense, lo que reflejaría un criterio de exclusión.

Reactivación económica e inversiones en infraestructura

El presidente Biden propuso un plan de rescate de la pandemia, de 1,9 billones de dólares aprobado por el Congreso en marzo. Además, propuso un plan de infraestructuras, con inversiones de dos billones de dólares a ocho años y que impactaría en millones de empleos, la mayoría de ellos asociados a una economía verde. Este plan de infraestructura se financiaría con base de una reforma fiscal orientada hacia las multinacionales -incluidas las grandes empresas tecnológicas- que han evitado el pago de impuestos federales. La reforma fiscal pretende subir el impuesto de sociedades del 21% al 28%, con lo cual se pretende recaudar 2,5 billones de dólares en los próximos 15 años (El País, 25 abril 2021). Esta propuesta es un cambio radical con respecto a pasadas administraciones y refleja un alto sentido social, lo que ha implicado que se generen algunas críticas de parte del sector empresarial y del partido republicano.

Política y gestión migratoria

En esta materia ha habido un cambio fundamental con respecto al gobierno anterior. El gobierno plantea una nueva gestión migratoria, privilegiando la integración de los menores no acompañados, luego de la política de exclusión de la pasada administración, que canceló el programa de reunificación familiar. Este programa ha provocado un aumento en el flujo de menores no acompañados. Con lo cual han aumentado las detenciones, cerca de 18, 800 en el mes de marzo, según datos del CBP, el mayor número desde hace 15 años. Cuyo número de deportaciones se estima en 170 mil en el mes de marzo, la mayor parte de origen mexicano. Se mantiene el Título 42 con la cual se deporta de manera inmediata a los migrantes irregulares por el contexto de la pandemia. Sin embargo, existe una demanda de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) (Chicago Tribune, 1 abril 2021) que la administración Biden

ha heredado, con la cual se pretende impedir que el gobierno aplique esa directiva a las familias migrantes, por las implicaciones de persecución al ser deportados. En caso de ser suprimida la directiva 42, podría cuestionar la estrategia fronteriza de la administración y generar un nuevo desafío de detención. El punto de interpretación legal es que si bien la directiva 42 prohíbe la "introducción" de extranjeros en Estados Unidos por razones de la pandemia, pero no impide que se les expulse a ciudadanos extranjeros que ya hayan cruzado al país de manera ilegal.

Otra interpretación de mantener la directiva 42, es que con tal política de control migratorio, el presidente Biden pretendería tener el aval político del Senado para su reforma migratoria, que sigue siendo su prioridad principal. Y sería la primera reforma migratoria de una administración demócrata.

Iniciativas ejecutivas y el control de armas

En Estados Unidos se han presentado al menos 150 tiroteos masivos en 2021, según datos del Archivo de Violencia con Armas (GVA), (CNN, 16 abril 2021). En tal contexto, el Presidente Biden propuso el 8 de abril algunas órdenes ejecutivas al Departamento de Justicia para que en 30 días emita regulaciones sobre las armas ensambladas de forma casera a partir de varias piezas y que carecen de serie para rastrearlos. Es legal la fabricación de este tipo de armas y no existe un requisito federal para una verificación. Una segunda orden ejecutiva, endurecerá las regulaciones sobre las pistolas que se adaptan como rifles, -fue el tipo de arma utilizada por el agresor de Boulder, Colorado, el mes pasado, quien asesinó a diez personas -. Estas armas serán consideradas como rifles de corto alcance. De esta forma, los propietarios de esas armas requerirán una licencia federal. Además, el presidente Biden pedirá a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos que publique un informe anual sobre el tráfico de armas de fuego en este país. También se pretende orientar inversiones en programas de intervención contra la violencia comunitaria.

Estas medidas son un avance, pero insuficientes, se requiere un apoyo bipartidista para una legislación integral. Por ejemplo, es necesario otras normas como la reintroducción del veto a las armas de asalto, el levantamiento de una exención en las demandas contra los fabricantes de armas y la aprobación de una ley de alerta roja en el ámbito nacional. Sin embargo, las medidas de control de armas no serán viables debido a un Senado dividido y donde los republicanos se mantienen como un bloque unificado contra las propuestas presidenciales. Además, la Asociación Nacional del Rifle han sido muy crítica contra estas iniciativas presidenciales, afirmando que pretenden dismantelar la Segunda Enmienda, la cual establece el derecho a los estadounidenses a adquirir y portar armas. Es de mencionar que tal Asociación tiene un eficaz cabildeo en el Congreso para evitar un cambio en la legislación.

Abusos policiales y violencia

Uno de los principales problemas en la pasada administración fue el exceso de fuerza policial y que se manifestó con la muerte de George Floyd el 25 de mayo de 2020 en el área de Powderhorn, en Minneapolis, Minnesota. Con la cual se acentuó el debate sobre racismo, xenofobia y abusos policiales hacia ciudadanos afroestadounidenses. En ese contexto, el entonces presidente Trump firmó a mediados de junio del 2020 una orden ejecutiva para reformar los sistemas policiales del país, tras las protestas del asesinato de Floyd. La medida estipula entre otras acciones mejores prácticas policiales.

Recientemente han ocurrido otros casos de abuso policial, en la misma de ciudad de Minneapolis en donde fue asesinado el joven afroamericano Daunte Wright por una agente policial. En Chicago, también hubo manifestaciones contra la violencia policial. La muerte de Adam Toledo de solo 13 años fue la causa. Estos excesos policiales implican mejorar los protocolos de actuación policial y mayor respeto a los derechos civiles y humanos en especial de las minorías. El presidente Biden concibe que existe un racismo sistémico.

El 19 de abril Derek Chauvin fue declarado culpable de haber dado muerte a George Floyd, por el jurado con los argumentos de homicidio accidental, homicidio no intencional con desprecio por la vida y homicidio no intencional en la comisión de delito grave. Hecho poco común contra un policía blanco. El reto de esta sentencia es que ya no existan casos de violencia policial. Para tal efecto es fundamental que se concrete una reforma policial que evite los excesos del uso de fuerza en detenciones.

Política de cambio climático

Un tema central de la agenda de presidente Biden. Por lo cual convocó el 22 y 23 de abril, a los líderes de 17 países que son responsables del 80% de las emisiones globales. Con la reunión mundial se pretende reparar la Cumbre del Clima de Glasgow (COP26), que debía haberse celebrado en noviembre de 2020, pero que fue pospuesta por la pandemia y está previsto que tenga lugar entre el 1 y el 12 de noviembre del 2021. El presidente Biden pretende hacer de la crisis climática uno de los ejes centrales, para lo cual nombró a John Kerry como enviado especial del clima, y ha propuesto una inversión de 1,7 billones de dólares en energías limpias y se propone se reduzca a cero sus emisiones de gases con efecto invernadero para el año 2050.

Un logro importante fue el acuerdo suscrito con China en el marco de la visita de John Kerry -representante especial de la agenda climática- con su homólogo chino, Xie Zhenhua del 14 al 17 de abril. Ambos países son los mayores emisores de gases invernadero del mundo y acordaron colaborar en la lucha contra el cambio climático y cooperar en frentes multilaterales como la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Acuerdo de París. Otras medidas acordadas fueron el fortalecimiento de las "inversiones y la financiación internacionales", para apoyar la transición a la energía verde en los países en desarrollo. También prevén la eliminación gradual de la producción y el consumo de los gases que se utilizan principalmente en refrigeración, acondicionadores de aire y aerosoles (El País, 18 abril 2021). Cabe mencionar que el acuerdo de París de 2015, fue negociado por John Kerry en calidad de secretario de Estado, en donde se comprometieron las naciones a controlar los aumentos de temperatura en no más de dos grados. El acuerdo bilateral suscrito refleja la voluntad de ambos países de superar sus diferencias estructurales en materia de derechos humanos en la región de Xinjiang y Hong Kong, las presiones de Pekín sobre Taiwán o su guerra tecnológica.

Política antidroga

En este tema no se había planteado una agenda presidencial explícita en el ámbito internacional o binacional. Acorde a la Oficina Nacional para el Control y las Políticas sobre Drogas (ONDCP, 2021) el contexto del consumo de drogas radica desde el 2015 cuando las muertes por sobredosis en el país se

incrementaron en un 35 por ciento y llegaron a 70,630 muertos en el 2019. El aumento se atribuye principalmente al consumo de opiáceos sintéticos y fentanilo, cocaína y metanfetaminas. Se reconoce que estas drogas provienen del exterior, por lo cual se fortalecerá la cooperación con Colombia y México (ONDCP, ibídem). Se pretende diseñar una estrategia integral para responder a la producción ilegal de drogas, y promover la cooperación bilateral en enfoques de salud pública, institucionalidad y el desarrollo de infraestructura.

A principios de abril la Casa Blanca a través de la ONDCP (Ibídem). da a conocer su política antidrogas la cual se basa en seis prioridades: Ampliar el acceso al tratamiento basado en evidencia; promover la equidad racial en el enfoque de la política de drogas; mejorar los esfuerzos de reducción de daños basados en evidencia; apoyar los esfuerzos de prevención basados en la evidencia para reducir el consumo entre los jóvenes; reducir la oferta de sustancias ilícitas; promover lugares para la recuperación y tratamiento de adicciones; y ampliar el acceso a los servicios de apoyo a la recuperación (ONDCP, 2021). El reto de estas prioridades gubernamentales es su factibilidad institucional, en términos de capacidades para la implementación y si existirán los recursos financieros.

En el contexto de la crisis migratoria fronteriza el gobernador de Texas, Gregg Abbott, solicitó al gobierno federal a mediados de abril incluir a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales (El País, 15 abril 2021). El gobernador responsabiliza a los grupos criminales de la crisis en la frontera, en donde en marzo se detuvieron a 170 mil migrantes, el mayor número de ingresos en los últimos 15 años. El reconocimiento gubernamental como organizaciones terroristas permite al gobierno federal buscar penas más duras, incluidas cadenas perpetuas, en los procesos judiciales que se lleven en contra de los miembros de los carteles o para quienes los apoyen con recursos materiales o dinero. La decisión de tal evaluación gubernamental dependerá del secretario de Estado, Anthony Blinken, de Merrick Garland, el Fiscal General y Janet Yellen, secretaria del Departamento del Tesoro.

Es destacar que el presidente Biden, estuvo 36 años consecutivos en el Senado representando a Delaware. Entre 1973 y 2009, propuso leyes con México. En temas como narcotráfico y seguridad. Incluso propuso una alerta de viaje a los ciudadanos estadounidenses de evitar viajar a Jalisco, a raíz del asesinato en 1982 de Enrique Camarena, entonces agente especial de la DEA.

Como se aprecia, la agenda del presidente Biden a 100 días de su gestión refleja cambios, logros y retos por abordar. Ha marcado una diferencia en la mayor parte de los temas de política interna e internacional con respecto al gobierno de Trump. Es tal su dinamismo, que considera postularse para un segundo período presidencial. Lo cual dependerá de su eficacia gubernamental y de sus capacidades físicas.

Conclusiones

El objetivo de este reporte ha sido destacar los aportes y retos de la administración del presidente Biden a 100 días de su inicio. Para tal efecto, se analizaron el contexto de su ascenso, el debate de los derechos civiles y los grupos de extrema de derecha que generaron violencia en el Capitolio; también se analizó la política laboral en Estados Unidos y algunas implicaciones para las comunidades migrantes en Estados Unidos y finalmente, se examinó la agenda diversa del gobierno de Biden en materia de COVID-19, gestión y política migratoria, política de cambio climático, control de armas, derechos civiles y política antidrogas.

Entre los retos de la coyuntura de Estados Unidos está el de crear un mejor balance entre el individualismo, herencia de la Ilustración y el capitalismo global, y el bienestar colectivo. Todavía no es claro cuál será el desenlace de esta tensión. Lo que sí parece cierto es la necesidad de encaminar el país a un rumbo distinto - para salir de la pandemia y crear un país con menor desigualdad y mayor justicia.

En resumen, en medio del contexto contemporáneo estadounidense de múltiples, yuxtapuestas y mutuamente potencializadas crisis, la voluntad de culpar a otros y el deseo de mantener el orden social tradicional de privilegios y poder de grupos de odio y antigubernamentales, quienes pueden ser el brazo paramilitar y conspirativo del trumpismo, con influencia innegable en ciertas localidades y estados. Estos grupos estarán presentes en el contexto social estadounidense, lo que implicará promover una mayor conciliación y la aplicación del Estado de derecho.

En materia de política laboral, se necesitan estrategias de negociación con el sector empresarial que permitan avanzar en los objetivos previstos. La negociación se anuncia complicada dado que el programa laboral está cuestionando las estructuras laborales del sistema estadounidense, especialmente en cuanto al derecho de sindicalización y la defensa de los derechos colectivos de los trabajadores, y la regulación de un sistema, que se ha caracterizado por la precarización de sus trabajadores por su calidad migratoria o raza. El reto no solo es negociar sino encontrar un balance entre intereses empresariales y laborales que impida la confrontación abierta.

Como se aprecia, la agenda del presidente Biden a 100 días de su gestión refleja avances, logros y retos. Ha destacado su diferencia en la mayor parte de los temas de política interna e internacional con respecto al gobierno de Trump.

